



Tapachula, la “ciudad cárcel” al servicio de Trump

(Isaín Mandujano, pág. 29-30)

Tapachula, Chis.- Atrapados en esta ciudad fronteriza, migrantes africanos sobreviven en condiciones precarias y sin servicios básicos; exigen libertad de tránsito por el territorio mexicano y se autodenominan “rehenes” de la política migratoria impuesta por el gobierno de Donald Trump al de Andrés Manuel López Obrador.

Han viajado varios días, semanas o meses, algunos en avión, otros en barco, tren o autobuses, incluso a través de la selva amazónica, para alcanzar el norte del continente. Llegaron a Sudamérica desde diversos países de África con el objetivo de instalarse en Estados Unidos o Canadá, pero su viaje se truncó en esta ciudad de la frontera sur de México.

En casas de campaña, bajo los agua-ceros de la temporada y una temperatura promedio de 35 grados, sobreviven afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI, la “estación modelo” creada en el gobierno de Vicente Fox. Ahí hombres, mujeres y niños deambulan, cocinan y alivian sus necesidades fisiológicas en la maleza. Afuera de la estación acampan unos 500, pero la mayoría se encuentra en los alrededores o en el centro de Tapachula; son unos 3 mil. Se refugian en casas abandonadas, iglesias, corredores de vecindarios y las posadas más baratas. A pocos les alcanza para quedarse en un modesto hotel.

Los lugareños se cruzan con los africanos, sobre todo por las tardes, cuando la plaza central está atiborrada. Sobresalen por su color de piel entre la morena multitud mexicana; algunos hombres corpulentos y las mujeres curvilíneas atraen las miradas.

Pero se sienten atrapados, encarceldados en una ciudad de la que no pueden salir para avanzar en su camino. Se dicen rehenes de la política migratoria que el gobierno del presidente Donald Trump le ha impuesto a su par mexicano. Después de tantos países andados, los migrantes africanos reclaman que en ningún país los trataron tan mal como éste.

Telenovela sin final feliz

En la multitud de migrantes africanos, también llamados extracontinentales, algunos hablan inglés, otros, francés, portugués y lenguas originarias de Senegal, El Congo, Sierra Leona y Camerún, pero también de la asiática Sri Lanka, y a ellos se suman los migrantes de este hemisferio, los de Haití. Poco han aprendido o no se esfuerzan por hablar español. Distinto es el caso de María, que se identifica con ese nombre ante los medios y los periodistas para simplificar las entrevistas. Originaria de Angola, María era una activista y defensora de los derechos de las mujeres que empezó a comprender y hablar español por las telenovelas



mexicanas. Ahora el idioma de los melodramas le permite contar su historia, semejante a la de muchos otros de sus compañeros de travesía, y ser la vocera del grupo para manifestar su inconformidad. Madre de siete hijos, salió el 16 de mayo de su país. Durante más de tres meses viajó de un continente a otro; en Brasil cruzó la selva amazónica, pasó por Colombia y Centroamérica. Muestra en su teléfono celular los videos de las largas caminatas por la maleza y los lodazales de la selva, con sus hijos detrás. Dice que en todos los países les dieron agua, comida, atención médica y albergue temporal, pues sabían que no pretendían quedarse. Pero se quedó varada en México, el país que idealizó por sus telenovelas, en las cuales los pobres salen adelante pese a la adversidad.

Claro que está decepcionada del país, de su gobierno. Desde Angola sus amigas le preguntan si ya conoció a los artistas (la mayoría de los que menciona son de Televisa) y ella les contesta que se les retuvo en la frontera sur.

Además de la indiferencia de las autoridades migratorias, aquí enfrentan el rechazo por ser extranjeros y los prejuicios por su color de piel. Son señalados de portar el virus del ébola y de causar el incremento de infecciones por VIH en la región, como se publicó en el diario Milenio el 24 de septiembre. En esa nota periodística se dice que la Secretaría de Salud local, a través de la Coordinación Estatal de VIH/sida, y la ONG Brigada Callejera le atribuyeron al alza en el flujo migratorio el incremento de casos de enfermedades de transmisión sexual, como sífilis y VIH. En particular estigmatizaron a los migrantes africanos.

Los desdeñados

Irineo Mujica, activista de la organización defensora de migrantes Pueblos Sin Fronteras, dice que el gobierno de López Obrador actúa como policía del gobierno de Estados Unidos, pues todo México es el muro que Trump les prometió a sus votantes.

Claudia León, del Servicio Jesuita de Apoyo a los Migrantes, confirma que en Tapachula los africanos resienten más las políticas públicas del país contra el libre tránsito de personas. Describe la situación como una emergencia humanitaria que el gobierno pretende ignorar, ya que un año después de iniciar el éxodo no han mejorado las condiciones de estos grupos, en especial los africanos y los haitianos.

El gobierno les ofreció la residencia permanente en esta región o bien la salida por la frontera sur, pero eso viola su derecho a la protección internacional y condiciona su estancia legal.

León aclara que todo migrante tiene derecho a pedir refugio en el país que desee y no sólo donde se le ofrezca o se le imponga. Muchos africanos vienen huyendo de la violencia en sus países y el intento de deportarlos implica ponerlos en riesgo. La defensora coincide en que Tapachula se volvió una “ciudad cárcel” para los migrantes africanos, que carecen de todos los servicios y de atención



gubernamental, todo ello en el contexto de la campaña electoral en Estados Unidos, ya que Trump pretende seguir en la presidencia y usa el tema para ganar simpatías.

Considera que el gobierno federal no puede consentir que la gente viva así, por más que Trump haya empezado a mandar en México. Invoca el reconocimiento internacional que el país tenía al recibir a los migrantes españoles que huyeron del franquismo, pero ahora el presidente de Estados Unidos le impuso otra cara: “Está convirtiendo en cárceles ciudades, como Tapa-chula, que siempre habían sido de paso”.

El pasado 28 de septiembre, el titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, estuvo en Tapachula en su segunda visita al país. Los inmigrantes africanos quisieron que escuchara su reclamo y lo siguieron hasta el aeropuerto, pero no lo consiguieron.

Grandi declaró que la ACNUR se ciñe estrictamente a ayudar a refugiados y esos migrantes no tienen aún ese estatus. Su oficina, aclaró, interviene a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Sin embargo, al final de su visita Grandi dijo que en la frontera sur “se ocupó de la situación de personas procedentes de algunos países de África, así como de haitianos y cubanos”, muchos de los cuales no desean solicitar la condición de refugiado en México.

---ooo0ooo---

El desmoronamiento de los Cusaem

(José Raúl Linares, pág. 22-24)

El primer semestre de 2019 los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) comenzaron a perder los contratos heredados de la administración de Enrique Peña Nieto. De los 17 que firmaron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –por un total de 85 millones de pesos, según una consulta en la plataforma Compranet– sólo seis permanecen activos y tendrán vigencia hasta diciembre próximo. Se trata de convenios firmados para la vigilancia de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la empresa Liconsa (hoy Segalmex), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, según la plataforma consultada y corroborada con varias entrevistas. Cusaem sólo firmó contratos por un valor estimado en 10% de los ingresos que obtuvo en el sexenio pasado, los cuales representan ganancias superiores a los 8 mil millones de pesos, según solicitudes de acceso a la información pública disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y en revisiones al portal de Compranet.



El círculo mexiquense

Frente a la pérdida de licitaciones, el pasado 2 de mayo decenas de policías de Cusaem se apostaron frente a las instalaciones del Congreso del Estado de México para exponer sus inconformidades laborales –bajos salarios, maltrato, carencia de prestaciones– y exigieron la presencia de su director, José Manuel Álvarez González, cercano a Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación durante la gestión de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, en 2008 Álvarez González fue secretario particular de Navarrete Prida cuando éste fue secretario de Desarrollo Metropolitano durante la gestión de Peña Nieto en el Estado de México; en 2009 y 2010, cuando Navarrete fue diputado federal, se desempeñó como asesor. Dejó el cargo para irse a Cusaem, donde estuvo dos años. Cuando Navarrete Prida llegó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Álvarez fungió como su secretario particular, donde estuvo hasta 2017. Ese año fue nombrado director general de Cusaem, donde aún despacha.

Bajo investigación

Tras la protesta de los uniformados frente al Congreso mexiquense, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, Liliana Gollás Trejo, de Morena, llamó a comparecer a Álvarez González “para aclarar la situación legal” de Cusaem y “deslindar responsabilidades legales si existiera mal manejo de los recursos”. El mismo mes de mayo, Gollás Trejo giró el oficio GTL/050 en el que solicitó los estados financieros de los Cusaem y pidió que le fuera detallada la situación fiscal del organismo, así como sus adeudos ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym). También solicitó copia del Manual de Operaciones y del organigrama de la corporación, número de elementos y armas con las que cuenta, así como una relación de demandas en su contra.

A prueba de la transparencia

Tres meses después de la protesta de policías de Cusaem, el auditor Fernando Baz Ferreira, titular del Órgano Superior de Fiscalización en el Estado de México (Osfem), presentó su renuncia tras argumentar que el Congreso no tenía la posibilidad de auditar los Cuerpos de Seguridad Auxiliares. Designado titular de Osfem desde 2009, año en que Peña Nieto era gobernador en la entidad, Baz Ferreira forjó una carrera que se mantuvo inmune de ataques mientras el PRI mantuvo la mayoría en el Congreso local. José Guadalupe Luna Hernández, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, y quien durante años ha votado por transparentar las cuentas de Cusaem, sostiene que la negativa de Baz Ferreira impidió una auditoría a ese organismo.

---ooo0ooo---



Medina Mora, de oscura trayectoria, ahora en manos de la 4T (Jorge Carrasco Araizaga, pág. 8-10)

Eduardo Medina Mora prefirió renunciar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) terminara la investigación en su contra por lavado de dinero. Evitó así el escenario de ser sometido a juicio político y al desafuero en caso de que se le encuentre responsabilidad por la triangulación internacional de 102 millones de pesos como alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin precedente en la historia reciente de la Suprema Corte, y sin expresar causa alguna, Medina Mora le presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador. El jefe del Ejecutivo la aceptó de inmediato. La propia SCJN prefirió guardar silencio.

El choque con AMLO

“El presidente aceptó la renuncia horas antes de que trascendiera públicamente”, dijeron las fuentes de este semanario. Aunque en ese momento no se habían aclarado las “causas graves” que establece el artículo 98 de la Constitución para que el presidente acepte la renuncia de un ministro de la Corte y la apruebe el Senado de la República. A pesar de que su renuncia ya había sido aceptada por el presidente, la SCJN pretendió darse por no enterada. La tarde del jueves 3, cuando la noticia ya se había extendido, el máximo tribunal publicó en su cuenta de Twitter que estaba en espera de la confirmación de la renuncia.

Marcaje político-financiero

En enero pasado, apenas llegó a la Pre-sidencia de la República, López Obrador arremetió contra el renunciado ministro. En un acto en el estado de Veracruz aludió a él como representante del “huachicoleo de cuello blanco” en el Poder Judicial de la Federación: “Cuando llegamos, entrando entrando, querían unos exdueños de la empresa Modelo que se les devolvieran como 35 mil millones de pesos por ISR (Impuesto Sobre la Renta). Y esto era una costumbre. Los de arriba o no pagan impuestos o cuando pagaban se les devolvía, ya sea el IVA o el ISR. Nos dimos cuenta e intervenimos en la Suprema Corte. Y a pesar de que ya había un dictamen para que se les devolviera el dinero, se echó atrás esa resolución. ¿Cuánto nos ahorramos? 35 mil millones de pesos. Esto, con los huachicoleros de cuello blanco”, dijo López Obrador el 29 de enero en un acto público en Minatitlán.

Improvisación y fracasos

Antes de ingresar al sector público, Medina Mora se desarrolló en el empresarial. Fue director adjunto del Grupo Desc, un conglomerado de empresas industriales –del sector del consumo, químico y automotriz– e inmobiliarias dedicadas al desarrollo residen 10 años, hasta que el presidente Vicente Fox lo nombró director del Cisen, convertido hoy por el gobierno de López Obrador en Agencia Nacional de Inteligencia. Sin ninguna experiencia en el ámbito de la inteligencia y seguridad



nacional, como en ninguna de las otras altas posiciones que ocupó, cuando llegó al Cisen anunció una reestructuración que se quedó en promesa. Gestionó la Ley de Seguridad Nacional, que se limitó a regular a esa agencia, en la que pretendía imponer la clasificación de la información de seguridad nacional hasta por 30 años. Grupos de académicos y especialistas lograron que el Congreso fijara como plazo máximo de reserva 12 años.

---ooo0ooo---